

Las ONG en el futuro de la cooperación internacional

La importancia de la sociedad civil como actor clave para la implementación de políticas inclusivas

Miquel Carrillo, consultor en cooperación internacional, miembro de Ingeniería sin Fronteras y vocal de la junta de la Coordinadora estatal de ONGD.

A estas alturas, debería estar meridianamente claro que en nuestro país la cooperación internacional existe, si no absolutamente sí en gran parte, gracias al impulso inicial de personas, colectivos y organizaciones, preocupadas por el destino de otros individuos, comunidades y sociedades lejos de estas latitudes. De los propósitos y enfoques que motivan y articulan esa voluntad de hacer algo por tener un mundo mejor, superando las cuatro paredes de nuestros municipios, comunidades autónomas y estado, también podría hablarse mucho (y en parte lo haremos aquí). En cualquier caso, la tesis fundamental de este texto es que sin la sociedad civil organizada, el hilo de la cooperación internacional y de su producción como política pública, se vería interrumpido o sería condicionado por intereses espúeos, sin que esto último sea incompatible con la presencia activa de las ONG en este ámbito, como así se ha demostrado ampliamente.

No es hora, por supuesto, de mantener debates corporativistas ni de soslayar malas prácticas o connivencias con la versión colonial de la solidaridad internacional, pero sí de recordar y reiterar el papel que las organizaciones tenemos o deberíamos tener en la construcción de sociedades democráticas y en pleno disfrute del último de los derechos. Y cómo ese papel es difícil de sustituir, no sólo en lo que respecta a las acciones en otros países, sino también en el cometido de generar una sociedad civil crítica en nuestro país, consciente de los retos globales a los que nos enfrentamos y dispuesta a implicarse de alguna manera.

No es tampoco momento de preguntarse sobre la idoneidad de mantener en marcha la cooperación internacional: desafíos de las dimensiones planetarias de la pandemia o la emergencia climática han enseñado, mejor que todas las campañas juntas realizadas a tal efecto en el conjunto de países del CAD¹, que sin un reenfoque colaborativo de las relaciones internacionales hacia la preservación de los bienes comunes, no hay opciones de futuro. La pregunta y la propuesta es cómo seguir colocando a la sociedad civil en el puente de mando de los cambios que vienen, y no como una estampita milagrosa a la que encomendarse en los rigores del camino.

1 CAD, Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

El rol de las ONG

¿Conocen las personas que leen estas líneas algún país del mundo que haya protagonizado una evolución democrática por generación espontánea? Siempre estuvieron detrás elementos ajenos a los intereses políticos u económicos que sustentaban a las oligarquía y cleptocracias en el poder, aunque fuera para lavar la cara y hacer más soportable la connivencia con regímenes detestables, cambiarlo todo para que nada cambiara; o para emprender realmente la senda de la emancipación. Las influencias, presiones y redes de solidaridad internacionales han servido históricamente para activar, mantener y acelerar procesos políticos. Sin pensar en cambios de régimen en lejanas repúblicas bananeras, multitud de conflictos sociales o ambientales han podido conectarse e identificarse en marcos estructurales globales gracias a la conexión con otras luchas y las organizaciones que las sostenían, identificando los mismos factores, incluso actores, que las determinaban en otras realidades. Las organizaciones de la sociedad civil, gracias al vehículo que ha significado la cooperación internacional, han podido cumplir con ese rol conector y de sustento político, tan importante como la difusión internacional, el apoyo económico, legal o el asesoramiento técnico, cuando este era relevante.

En una sociedad globalizada como la actual, la acción de agentes internacionales, paulatinamente más desarraigados de los territorios en los que operan, va a ir en aumento. Su naturaleza financiera y diversificada, en forma de fondos de inversión, con activos comparables al PIB de muchos países importantes, los dota de una mayor complejidad e inmunidad ante la protesta local, al hacerse invisibles a las opciones de consumo o convertirse en un punto de apoyo imprescindible para unos estados faltos de liquidez y endeudados hasta las cejas. Es necesario ganar en masa crítica para afrontar desde el interés común esta nueva etapa del capitalismo, que en el mejor de los casos puede abonarse a la Agenda 2030 y en el peor puede acabarse con todo lo demás que conocemos de nuestra civilización.

Sin llegar a la sofisticación o los niveles financieros de *BlackRock* o *BlackStone*, también persiste la preocupación por las prácticas de las empresas internacionales más tradicionales y sus cadenas de suministradores. La violación o poca consideración de los derechos humanos, allí donde las regulaciones no existen o los vigilantes miran hacia otro lado, es todavía una práctica habitual. También las resistencias a establecer mecanismos de debida diligencia, a pesar de los pasos que se van dando a nivel internacional (la UE prepara una directiva, y Francia, Alemania o Noruega han dado pasos valientes), y algunos compromisos formales e informales a nivel nacional y autonómico. Es evidente que cuando se determinen los mecanismos de verificación del cumplimiento de todas esas normativas por venir, se consiga o no situarlas en el marco de la obligatoriedad, el papel de las organizaciones en terreno será determinante para establecer el grado real de cumplimiento. Que existan redes con suficientes capacidades para llevar a cabo ese trabajo de vigilancia y denuncia, tendrá mucho que ver con qué modelos económicos reales se activan en lo que queda del planeta por ser absorbido por el capitalismo. En ese sentido, África, la última frontera del sistema, se ha convertido en el objetivo de una comunidad internacional que necesita recuperar la utopía del crecimiento ilimitado tras el parón pandémico, y donde seguramente sea más urgente apoyar esas redes, presencias, capacidades y complicidades, con una sociedad civil increíblemente activa, que en la última década se ha subido al carro de las nuevas tecnologías y ha construido sus propias primaveras digitales.

Quien empuja y provoca la producción de todos esos marcos legales, es también la sociedad civil. Sería difícil de imaginar su necesidad y movilizarse para hacerlos posibles sin la visión que proporciona el trabajo internacional, o sin la conexión directa con las poblaciones damnificadas por represas o plantaciones de palma africana. Sin saber los efectos sobre la deuda que tiene la avalancha de infraestructura que no rinden lo esperado en África, sería casi imposible oponerse a una cooperación cada día más financiera, que además generará empleo en nuestras empresas. Tener a nuestra disposición la foto entera y estar libres de intereses espúreos, nos coloca en un lugar y ante una responsabilidad no intercambiable y menos sustituible, si es que lo que realmente nos importa es avanzar por esa senda de los derechos humanos y la justicia global.

De necesidades a derechos

Porque no tiene por qué ser así, a veces pensamos que todas las ONG son iguales. Si no son ustedes de los que ven a la cooperación y a las organizaciones que la practican en ese papel de radicalidad democrática, hay roles para todos los gustos. Reconozcamos, por otro lado, que es complejo dejar atrás una idea simple de la cooperación como es la redistribución de nuestros excedentes, para cubrir las necesidades de personas que no han tenido la suerte de nacer donde nosotros. Difícil, por lo menos, de comunicar al gran público: no es evidente el adentrarse en un marco de confrontación política fuera de nuestros países de origen, para contribuir a construir los derechos de los que disfrutamos. Saltarse las soberanías, aunque no sean democráticas y sí muy opresivas, es siempre desagradable y suscita menos consensos que simplemente repartir pan, lápices y aspirinas. Amén de que la retina humana necesita objetos embutidos en fotografías con guirnaldas para identificar el destino del dinero, sobre todo si proviene del erario público.

En efecto, el enfoque de derechos, y mucho más el basado en el género, es todavía una asignatura pendiente y tendría que hacernos reflexionar sobre varias cuestiones. Por una parte, sería mucho más justo para todas las partes asumirlo, por cuanto dejaría un espacio vital imprescindible para el crecimiento de las organizaciones en el sur global y acabar de decolonizar, como se dice ahora, relaciones a las que les cuesta sacudirse de encima el paternalismo y el complejo *white savior*. Crecer y asumir responsabilidades, decisiones, riesgos, empoderarse como actores políticos, y superar el mero papel de conseguidores de recursos alternativos a los que las respectivas administraciones públicas de sus países ponen en juego. Por otro lado, acabaríamos con esa acusación, a veces cierta, de estar sustituyendo (y por tanto obstaculizando o distorsionando) a las propias administraciones públicas en el sur global, haciéndonos cargo de las obligaciones que les corresponde ejercer. En los cálculos de muchas de estas, la variable cooperación sustituye a la mejora de la fiscalidad interna, endonsándole una serie de áreas sensibles y guardándose para sí otras difícilmente asumible por la AOD internacional. Asimismo, focalizarse en lo material convierte a nuestras acciones en presa fácil de la insostenibilidad económica o administrativa: es infinitamente más fácil construir hospitales o escuelas que asegurarse de que funcionarán correctamente en las próximas décadas, y de momento la cooperación solo es fiscalizada por las facturas que se presentan en los informes de justificación, no por los resultados o impactos logrados

(o no). Esas dependencias creadas en base a la ayuda internacional acaban generando círculos viciosos y, sobre todo, peligrosos para desmontar a la postre las causas y relaciones de poder que subyacen a la pobreza.

Pero incluso en el supuesto de que simplemente quisiéramos ayudar sin preguntar cómo se llegó hasta aquí, renunciando a auspiciar entente alguna entre los nadie del mundo, o animar a los gobiernos de todas partes a hacer su trabajo, las ONG tenemos un rol insustituible; y entendiendo bajo esas siglas a las organizaciones que desde un lado u otro trabajamos para asegurar la alimentación, la educación o la salud, convertidos en derechos o saciadas como necesidades básicas. Por un lado, la capacidad de capilarización en los territorios en los que trabajamos y de conocimiento no es alcanzable por otros actores. También de creación de relaciones de confianza, que están detrás de esa conexión con los agentes claves y que se basan en compromisos a largo plazos, no sujetos al vencimiento de ningún contrato de prestación de servicios o a la maximización de beneficios. Una idea mucho más próxima a lo que se conoce por economía social y solidaria, que a veces se confunde peligrosamente con la precarización de las condiciones laborales de las personas contratadas por las entidades o con el abuso del compromiso de quienes colaboran desde el voluntariado.

Nuevos actores

Se ha instalado una especie de dogma o idea fuerza en la gran mayoría de administraciones públicas, según el cual es necesario y urgente aumentar la tipología de actores que implementan la cooperación internacional. Es algo en lo que coinciden administraciones de todo tipo, contenido en planes directores y convertido casi en un lugar común de las discusiones del sector. Esa idea se observa, desde un sector amenazado constantemente por la carencia de recursos, con bastante preocupación. Si la precarización antes citada o la amputación de proyectos no fuera suficiente, ahora vamos a tener que competir con otros *actores* que alguien ha invitado para disputar esos recursos siempre cuestionados. Cuando se alza la voz, entonces las ONG son acusadas de corporativistas o proteccionistas, y de oponerse a algo que parece poco menos que el curso natural de la historia.

Cabe hacer algunas reflexiones al respecto. En primer lugar, los *nuevos actores* siempre estuvieron ahí. Las universidades, los sindicatos o las empresas, han formado parte tanto de la gobernanza como de la práctica de la cooperación desde hace varias décadas, y probablemente no han profundizado en su implicación porque la relación esfuerzo-beneficio no les era favorable, especialmente en el caso de las empresas privadas. Por lo que respecta a las universidades, probablemente haya habido un mal encaje con sus mecanismos y peor adaptación o comprensión de la evolución que ha sufrido en los últimos tiempos, donde su función social se ha ido diluyendo gracias a la reforma de Bolonia, entre otros factores. Desde luego y para el potencial que tienen, se la ha implicado poco en la generación de conocimiento y debate sobre todas las cuestiones alrededor del desarrollo, la paz y los derechos humanos. Menos todavía, y quizás eso sea aún más grave, en modelar una educación superior sensible a los grandes desafíos actuales y cómplice en la creación de una ciudadanía crítica en su última etapa formativa. En los últimos años ha forjado más currícula que conciencia ciudadana, y la cooptación de los espacios de educación superior por parte de grandes empresas y entidades financieras, sacando partido de la precariedad en la que vive de forma crónica la universidad

pública en este país, ha servido de excusa para no incentivar el debate público crítico o la militancia. Es complicado, por otra parte, pensar en un sindicalismo de clase que rehuya el internacionalismo, y que evite el trabajo con otras organizaciones gemelas en otros países en los que los estándares laborales están por debajo de los nuestros, incentivando con ello el *dumping*. También estuvieron ahí, quizás concentrados en pocas organizaciones, convertidas en ONG para facilitar el acceso a fondos.

Capítulo aparte son las empresas. Si para todos los actores sirve la pregunta sobre su valor añadido o su contribución a la arquitectura de la cooperación internacional, esta cobra mayor sentido cuando concurre el ánimo de lucro. Nadie está *a priori* contra la participación de ningún actor, si realmente este aporta algo diferente o exclusivo, y si su presencia no genera contradicciones inasumibles o simplemente incoherentes. Si fuera el caso que una empresa ofreciera una red única e imprescindible de comercialización para productos del sur global o la capacidad de aportar un producto de I+D realmente necesario, sin dependencias y con todo el decálogo de la tecnología apropiada incorporado, por poner dos ejemplos, sería absurdo no reconocer el sentido positivo de su participación. Ahora bien, las empresas han tenido en estos años una participación más próxima a la filantropía dadivosa, en el mejor de los casos, y una preocupación más que cuestionable por asegurarse nuevos mercados a través de la cooperación, en la realidad más profana. La mezcla de intereses comerciales, de mejora de imagen y de adquisición de reputación en países en los que hacerse un lugar, ha guiado mayoritariamente su participación. En la reforma en proceso de la ley estatal de cooperación, la preocupación fundamental de la patronal es asegurar los mecanismos e instituciones imprescindibles para promocionar grandes licitaciones a las que acceder, y ganar. En ese sentido, la cooperación financiera y el futuro banco de desarrollo español, si llega a concretarse, están llamados a canalizar más ágilmente la AOD estatal y permitir su crecimiento hasta los estándares del resto de países europeos, evitando los costes de transacción que suponen las actuales herramientas de la cooperación. Las grandes empresas (porque el sesgo en el tamaño es evidente) están sentadas a ambos lados de la mesa: pensando y presionando por una cooperación internacional de la que sacarán beneficios. Como decía un diputado de un partido liberal-conservador en la subcomisión del Congreso encargada del proceso de reforma, “sin esos negocios tampoco podríamos generar ingresos para tener el 0,7% que tanto se reclama”. Ese es el marco en el que nos movemos.

En relación a la cooperación financiera, vale la pena poner el foco en los operadores financieros que aparecerán durante los próximos años alrededor de las llamadas inversiones de impacto. La captación de ahorro y su empaquetado solidario en operaciones de financiación de entidades de microcrédito o *facilities* de inversión en países del sur, va a ser una práctica creciente en los próximos años. Van a ser articulaciones o *blendings*, según la jerga, con apoyo público, en el que el capital de las administraciones servirá para cubrir los riesgos o aportar donativos que faciliten dichas operaciones (estudios técnicos o de mercado, capacitaciones, primeras pérdidas, etc.). El resto lo hará el reclamo de rentabilidades imposibles de conseguir con una cuenta corriente en la UE, además sin el *glamour* y la tranquilidad de espíritu de estar salvando a los pobres del mundo. Como todo, puede resultar un conjunto de recursos y nuevos actores con impactos positivos, o constituirse en un nuevo riesgo alrededor de la inyección de una deuda que espera succulentos retornos por encima de todo.

Bajo formas más o menos cambiantes, ya sabemos lo que van a hacer esos *nuevos actores*. Sin embargo hay otros que merecería la pena involucrar, y que además fueran las propias ONG las que se implicaran en su inclusión. Volvamos a la pregunta clave: ¿que aportarían a todo esto? Las cooperativas y entidades financieras de la economía social y solidaria (ESS), mucho, desde una perspectiva compartida con las entidades de cooperación, de un nuevo modelo económico centrado en las personas y en el interés común. Si se trata de apoyar organizativa y técnicamente al tejido productivo en el sur global, de ampliar los canales de comercialización o de favorecer el acceso a los servicios financieros, desde una perspectiva de justicia económica, la ESS tiene bastante que aportar, desde su propia experiencia. Además, nos colocan en el campo de la economía real, sin redes de protección, algo que las ONG, sin querer generalizar, no estamos acostumbradas a hacer. Y, por último, nos ayudan a denunciar la acaparación de la idea de *empresa* que han perpetrado las grandes corporaciones, especialmente al vincularla con la proyección y la acción internacional, hasta de la misma idea de *asociación pública-privada*, que cuesta visualizar sin grandes multinacionales.

También debemos considerar todo el dial de la sociedad civil. El ecologismo o el feminismo, por poner dos ejemplos muy claros, se piensan en onda internacionalista, y contribuyen desde su práctica local a fortalecer otras organizaciones y sociedades civiles. Pero también el deporte de base o el asociacionismo cultural pueden ofrecer experiencias enriquecedoras, que contribuyan por ejemplo a tener un deporte más paritario o una mejores políticas lingüísticas o de cultura popular. También es cierto que esos nuevos actores en su mayoría van a tener que ir de la mano de las ONG o de las administraciones públicas con buen conocimiento del terreno, y que sería poco realista pensar que de la noche a la mañana todos hicieran de la cooperación internacional su principal cometido. Las asociaciones de personas migradas fueron durante mucho tiempo la gran esperanza para generar una cooperación construida desde visiones más endógenas que las de las ONG del norte, y a pesar de los esfuerzos dedicados y las expectativas generadas, el recorrido ha sido más modesto del esperado. Seguramente han pesado diferentes factores (capacidades limitadas, intereses divergentes, racismo subyacente, etc.) pero el relativo poco recorrido del llamado codesarrollo debería servir de referencia, sin despreciar otros impactos que haya podido tener entre los colectivos de personas migrantes en nuestro país, como su activación asociativa y su reconocimiento social.

Reparto de papeles

En el debate de la nueva cooperación que necesita nuestro país, existe otro consenso, alrededor de esa pluralidad de actores, tanto de administraciones como de ONG: la necesidad de encajar las piezas en un sistema pensado globalmente, repartir papeles según las capacidades y asegurar los recursos necesarios en todos los niveles. Desde la óptica de las ONG, el repertorio de instrumentos de la cooperación se limita a las convocatorias públicas, basadas en la concurrencia competitiva. En un escenario de profesionalización de las ONG, desde los últimos años, la sensación desde las entidades más pequeñas es que la lucha por los recursos es inasumible, ante la competencia de las organizaciones de mayor tamaño. Estas, a veces verdaderas multinacionales de la solidaridad, disponen de maquinarias capaces de drenar hasta el último céntimo de cualquier convocatoria que sus radares detecten. Tampoco

es negativo per se: al fin y al cabo supone una oportunidad para muchos municipios o diputaciones para participar en proyectos con más envergadura y eventuales impactos, y tener acceso a unas capacidades o redes internacionales que de otra forma desconocerían. Pero, por otro lado, sería complicado que llegaran a movilizar a la población local o a involucrarse de la misma manera en proyectos educativos que necesitan de una proximidad, complicidad y conocimiento del territorio inaccesible desde las grandes oficinas.

Sin duda, es necesario encontrar un compromiso porque no tiene sentido renunciar a ninguna de las piezas de todo ese repertorio que ofrece la sociedad civil organizada. Eso pasa tanto por una claridad estratégica de las administraciones públicas y de las propias organizaciones, por disponer de acuerdos amplios que lo faciliten en el seno del sector, como por contar con instrumentos apropiados y financiación pública, suficiente y previsible, para habilitar todos los activos con los que contamos. La cuestión de la financiación, en concreto, es clave: se trata de proteger la actividad de centenares de pequeñas organizaciones en todo el territorio, capaces de realizar acciones educativas de proximidad y movilizar a la población, así como de involucrar a esta en proyectos de cooperación como no lo pueden hacer otros agentes antes mencionados. Lo que no parece aceptable es rebajar estándares de calidad o transparencia, o seguir instalados en dinámicas de dependencia, con tal de proteger el tejido asociativo propio, algo que viene sucediendo en muchos municipios del Estado.

Plantear algo así no es nada más que pensar la cooperación como una política pública, participada y plural, basada en acuerdos público-privados, que ya comprobamos que no tienen por qué limitarse a las empresas que cotizan en el IBEX 35. Durante mucho tiempo, hemos visto a buena parte del sector posicionarse en contra la producción de esa política de cooperación, bien por desconfiar de sus verdaderas intenciones, coherencia y capacidades, bien por erigirse como el único actor legitimado para llevarla a cabo. En el caso de la cooperación descentralizada, incluso se han cuestionado los fondos de cooperación por suponer sobrecostos en la gestión y desviar una pequeña parte de esos disputados recursos a tareas consideradas poco relevantes, y que al fin y al cabo desplazaban el centro de decisión lejos de los espacios seguros para las pequeñas entidades. Lo cierto es que pretender que la cooperación se limite a ser un asiento contable en los presupuestos municipales, provinciales o autonómicos (centrándonos allí donde el papel de las ONG es más relevante), es un mal negocio al final del día. Se vio con la crisis de hace una década: cuando las administraciones tuvieron que defender una política pública que en muchos casos no llegaba a serlo, que no se entendía y no se sabía explicar, o que estaba en manos de asociaciones distantes del imaginario político del gobierno de turno, estas las entregaron en sacrificio en el altar de la austeridad sin ningún remordimiento. La cooperación era poco más que un lujo, propio de los tiempos de vacas gordas, algo en los que las administraciones ni entraban ni salía, solo firmaban subvenciones por un vago compromiso ético, o como peaje para no escuchar protestas bajo el balcón.

En ese reparto de papeles, también hay que incluir a las administraciones públicas, poniendo en valor sus capacidades y experiencia de gestión, imaginando cómo el intercambio con otras realidades puede enriquecer la política local o autonómica, y reclamando una implicación desde todos los niveles para acometer esos desafíos globales tan acuciantes. Lo cierto es que la Agenda 2030 y la interpelación que realiza a todos los niveles administrativos para que se unan en el esfuerzo de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son una buena oportunidad para anclar

esa visión y esa responsabilidad extraterritorial de nuestras políticas públicas en el imaginario y el relato de dichas administraciones y los partidos políticos que están detrás. Lo es por la puerta que abre para exigir coherencia de políticas, pero también para plantear la producción de políticas públicas en relación a metas y resultados, con un impacto global manifiesto en muchos casos. Asimismo, porque facilita explicar el sentido de la cooperación y resituirla en un plano de aprendizaje mutuo con otras comunidades al mismo nivel, de interés propio, de retorno para la población en forma de ventana abierta y decodificador en clave local de todo lo que pasa en el mundo.

Reconocimiento institucional

Esa tentación de quedarse en exclusiva con la política no se ha visto solamente en el sector de las ONG, también entre las administraciones, sobre todo la Administración General del Estado (AGE). Si le preguntáramos al cuerpo diplomático, seguramente no sabría darnos una sola razón por la que, a su entender, las entidades de la sociedad civil participamos en el diseño y la implementación de la política exterior. Aunque seguramente la respuesta sería la misma si la pregunta versara sobre el papel de municipios y comunidades autónomas.

Durante los últimos años y a instancias de un requerimiento surgido del examen de pares a que el CAD somete periódicamente a España (*peer review*)², se ha venido negociando y dando forma a un *marco de relación* entre la AGE y la coordinadora estatal de ONGD. Ese marco persigue en el fondo el reconocimiento de la sociedad civil como actor de primer orden de la cooperación internacional, intentando disipar la informalidad y a veces una velada amenaza de no contar con él o modular su apoyo en función de las relaciones bilaterales, entre sector y AGE. De nuevo, la fragilidad estructural de la financiación de las ONGD (aunque esta sea ya más privada que pública en su conjunto, según la evolución de los últimos años) juega en contra de su fortaleza como interlocutor: por un lado, España es uno de los estados de la OCDE que menos apoyo estructural da a las estructuras de coordinación del sector en su conjunto³; por el otro, la financiación que proporciona la AGE al desarrollo, en manos de las ONGD, dependen de la recaudación del IRPF, y en concreto de la opción de marcar o no una casilla, a elección de la ciudadanía. La situación actual es cualquier cosa menos estable o previsible, y no hace sino que mantener una calculada precariedad de un interlocutor político que puede llegar a resultar incómodo.

Sin embargo, esa falta de reconocimiento también tiene que ver con nuestra falta de capacidad movilizadora, conocida y utilizada en ciertos ámbitos de las administraciones públicas. No ayuda tampoco la visión que gran parte de las organizaciones tienen de sí mismas, como prestadoras de servicios o ejecutoras de proyectos más o menos concertados con esas administraciones, donde prima asegurar la continuidad de las acciones en terreno. Desconocer esa opción y no considerar su dimensión real, sin embargo, también sería un error, aunque no esté en fase con un posicionamiento en general más crítico con las incoherencias del sistema que le da de comer y permite su actividad prácticamente como una válvula de escape. Esa diversidad existe y conviene gestionarla de manera generosa, porque la movilización o la simple educación a la ciudadanía (pensando siempre en el sistema formación-sensibilización-

2 Ver en <https://coordinadoraongd.org/2016/03/dice-informe-del-cad-la-cooperacion-espanola-2/>

3 Ver en [Aid for Civil Society Organisations, OCDE, abril 2020, pag. 34.](#)

investigación-incidencia-comunicación) es más necesaria que nunca y no sobran manos para llevarla a cabo, al contrario. De nuevo, buscando entre los roles que recaen en nuestra espaldas, lo que antes y todavía hoy conocemos como educación para el desarrollo sigue siendo uno de esos ámbitos en los que las ONG tenemos la capacidad de conectar con otras realidades y aportar elementos innovadores con los que incentivar una visión crítica entre la ciudadanía, que además supere el horizonte cotidiano de nuestros barrios y comunidades, desarmando discursos de odio, integrando la diversidad, la interseccionalidad y comprendiendo sus razones.

La movilización es necesaria, en cualquier caso, para avanzar en multitud de aspectos. Volviendo al principio, la denuncia de las injusticias globales tiene que empezar en nuestras calles y ante nuestras instituciones, medios de comunicación, empresas, partidos políticos, etc. En los últimos años hemos vivido de forma especialmente intensa una tensión entre la formalidad y la institucionalidad, entre redes y organizaciones. Caemos con facilidad en las dicotomías y en los antagonismos, olvidando los procesos vividos con anterioridad en la sociedad civil, no solo de nuestro país. Los movimientos, especialmente el feminista y el ecologista, relanzado por la emergencia climática, pero también el que reclama el derecho a la vivienda y otros más, han reactivado esas calles y plazas, conectándose o planteándose a menudo en clave internacionalista al hacerse eco y hacer suyas otras luchas en otros lugares muy distantes. La gente está ahí, evidentemente, lo que no invalida la función de las ONG que sostienen también esas causas, y que gracias a la institucionalidad ganada durante años aportan otros elementos a esa movilización y la enriquecen (captación de recursos, capacidad de gestión, interlocuciones, conexión internacional, etc.). Una vez más volvemos a la idea del reparto de papeles, de la suma positiva, y no de la mera substitución de unos actores por otros.

También es necesaria en la producción y defensa de una política pública como la cooperación, que a trompicones nos ha permitido llegar hasta aquí. Y en eso, aportando una última pero no menos importante razón para defender el papel de las organizaciones, es obligado reivindicar el rol de coordinadoras y federaciones en todo el Estado español, como interlocutores imprescindibles en la definición de dicha política. Cuesta imaginar cómo se habría construido esta sin las propuestas, las relaciones o el conocimiento en manos del sector. A veces se tiene la percepción de que el conjunto de políticas son inmutables y, descontadas las fluctuaciones presupuestarias o de apoyo político, van a seguir siempre ahí. Hay que recordar nuevamente la crisis que precedió a la actual y el desmontaje sufrido, total en algunas comunidades autónomas.

No cabe duda de que una interlocución unida y respaldada ampliamente, dispone de una posición negociadora más fuerte. Pero las coordinadoras y federaciones constituyen también un referente necesario para la mejora continua de la cooperación que llevamos a cabo, incluyendo siempre la educación dentro de ella, casi en primer lugar. Un espacio de actualización y de intercambio, que a veces sacrificamos si medimos las consecuencias de aislarnos.

Durante los próximos meses, la cooperación internacional va a vivir un debate intenso, tratando de ponerse al día y seguir siendo útil para la erradicación de las injusticias globales. En ese debate y en esa práctica es imprescindible que

sigamos estando las ONG, construyendo y haciendo posible probablemente la única política genuinamente participativa de la que disponemos. Por todas las razones expuestas y las que se hayan quedado en el tintero.